

SENTENCIA N° 0/2000

En a 0 de marzo de 2000.

El Ilmo. Sr. D. mmmmmmmmmmmmmmm Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal de ,,,,, ha visto los presentes autos de **Procedimiento Abreviado nº 000/2000** procedentes del Juzgado de Instrucción nº 0 de y seguidos ante este Juzgado, habiendo sido partes, como acusado **JUAN DIEGO** D.N.I. 000000000, nacido en Pueblo el 00.00.1900, hijo de MMMMMMM y DDDDDDD, representado por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr/a. PPPPPPPPPP y defendido por el/la Abogado/a Sr/a. AAAAAAAA, siendo parte acusadora el **MINISTERIO FISCAL**.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado de la Policía Municipal de nº nnnnnnnnn, de 00.00.2000, remitido al Juzgado de Instrucción nº 0 d por delito contra la seguridad vial, incoándose las Diligencias Previas 000/2000, formulándose acusación contra **JUAN DIEGO** por un delito contra la seguridad vial y una vez concluida su tramitación, se remitió a este Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento y fallo, en el que se admitieron las pruebas propuestas por las partes, señalándose y celebrándose el correspondiente juicio oral, el día 00.00.2000.

SEGUNDO.- El acusado compareció al acto del juicio. El Abogado de la defensa reiteró su petición de que admitiese las pruebas denegadas en su momento. El Mº Fiscal se opuso. Se reiteraron los argumentos del Auto de 00.00.2000 y se rechazaron las pruebas propuestas. El Abogado formuló protesta.

También presentó documentos que fueron admitidos (el Mº Fiscal no se opuso a su admisión). Se practicaron las pruebas propuestas por el Ministerio Público y la defensa, dándose por reproducida la prueba documental, por lo que se procedió a formular las conclusiones definitivas.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal modificó la conclusión 5º. En lo demás elevó a definitivas sus conclusiones provisionales. Acusó a **JUAN DIEGO** de ser autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del artículo 379.2 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, para quien pidió la pena (en esto modificó la calificación provisional) de 7 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP para el caso de impago y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante 1 año y 2 meses. Con costas.

La defensa interesó la libre absolución de su defendido.

Se oyó en último lugar al acusado y quedaron los autos conclusos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- JUAN DIEGO nnnnnnnnnnnnnnn es mayor de edad y carece de antecedentes penales.

El día 00.00.2000 alrededor de las 9.05 horas conducía el vehículo de su propiedad MMMMMM matrícula MMMMM –Asegurado enAAAAAAA-, por la Plaza de deLo hacía previa ingesta de bebidas alcohólicas que limitaban su capacidad para la conducción. Al llegar a dicha Plaza, frenó su vehículo e inició la marcha atrás sin percatarse –a pesar de que el conductor que estaba detrás tocó el claxon- que tras él se había detenido, también, el vehículo taxi matrícula mmmmmm conducido por Sotero PPPPPP MMMMMMMM, al que alcanzó en su parte delantera, causándole desperfectos cuya reparación se ha tasado en 256,16 € más 53,79€ de IVA. El Sr. PPPPP no ha reclamado cantidad alguna al haber sido ya indemnizado.

Tras el golpe, ambos conductores se bajaron de sus respectivos vehículos indicando el Sr. Sotero a J Diego que aparcasen en un lugar en que no perjudicasen la circulación. JuanDiego se montó en su vehículo y en lugar de detenerse en las inmediaciones continuó circulando llegando incluso a hacer un giro por lugar prohibido, dirigiéndose hasta la calle esquina donde, el Sr. Sotero, que lo había seguido, le dijo que se parase. Así lo hizo y tras observar el Sr. Sotero que su actitud era extraña, con lentitud de reflejos, llamó a la Policía Local. Hasta el lugar se desplazaron los agentes de Policía Municipal de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nº nnnnn y nnnn que sometieron a **JUAN DIEGO** a la prueba de detección alcohólica por medio de aire espirado usando el etilómetro Draguer Alcotest 7110 con número de serie ARZA-022, con certificación de verificación periódica de etilómetros de 28.9.2000, expedido por el Centro Español de Metrología. En la primera prueba –realizada a las 9.30 horas-, arrojó un resultado de 0.60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En la segunda prueba –realizada a las 9.48 horas- arrojó un resultado de 0.58 mg/l.

Los mencionados agentes policiales, apreciaron en JUAN DIEGO, como síntomas externos, ojos brillantes, rostro pálido, olor a alcohol, deambulación vacilante, dificultad en la comprensión y habla espesa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Abogado de la defensa propuso –entre otras pruebas- la documental consistente en librar los oficios que se reseñan al folio 52 de las actuaciones y –verificado- la pericial del Médico Forense en los términos descritos al folio 53. Se pedían –en síntesis- los “protocolos” y pruebas que han de practicar los Policías Municipales de a los conductores de vehículos de motor y ciclomotores para determinar el grado de influencia de bebidas alcohólicas en la conducción de los vehículos.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su cuarta acepción, define el protocolo como la <..secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc..>. El término (que ya se usaba para otras actividades de la vida –protocolos para poner en marcha una aeronave, un buque, realizar una intervención quirúrgica, test o comprobaciones mecánicas, etc-) se ha desplazado al ámbito de lo jurídico donde, a juicio de quien resuelve, tiene un

limitado uso ya que hay que recordar que, al menos en el Derecho Español, el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, están claramente establecidas en el Código Civil (ley, costumbre y principios generales del Derecho). El protocolo –al margen del defecto originario e insalvable que se acaba de señalar ya que no es fuente del ordenamiento jurídico- tiene la dificultad que no siempre es general (característica que siempre se predica de la ley). Así, es seguro que el protocolo de análisis de una avería en un vehículo Ford no es el mismo que si el vehículo es de la marca Ferrari (en ese sentido no se puede hablar de <generalidad>). Por tanto pedir el protocolo de actuación de la Policía Municipal de carece de sentido en el ámbito del proceso penal donde, las normas que regulan los requisitos para la conducción de vehículos de motor y los umbrales de alcoholemia (Ley 18/1989 de 25 de julio sobre Tráfico, circulación y vehículos de motor; RDL 6/2005 de 30 de octubre y RD 1428/2003, de 11 de noviembre) son las que priman y no sólo por rango normativo sino por la generalidad que supone su aplicación en toda España. De seguir la tesis de la defensa, si cada Policía Local utilizase “protocolos” diversos para comprobar las tasas de alcoholemia de los conductores, aparte de ser ilegal, supondría una desigualdad contraria a los principios de la Norma Fundamental (art. 14 CE). En consecuencia, como ya se dijo en el Auto de 30.11.2016, en el Acto del juicio y cuyo razonamiento ahora se amplían, la prueba no debía admitirse (como así se hizo).

SEGUNDO.- El artículo 379.2 del Código Penal sanciona como autor de un delito contra la seguridad vial al que condujese un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas y en todo caso se sanciona al que condujere con una tasa superior a 0.60 mg/l.

TERCERO.- En el caso concreto, apreciando las pruebas practicadas en el acto del juicio ha quedado acreditado que lo que consta en el apartado de hechos probados.

El propio acusado reconoció que había estado casi toda la noche de <fiesta> y había bebido (3 cervezas, 3 vasos de calimochó y 1 copa de ginebra con tónica). Eso fue reconocido también por sus amigos SSSSSS y RRRRRR.

No hay duda de que iba conduciendo por la Plaza PPPPPP y que se produjo la pequeña colisión (cuando el acusado emprendió la marcha hacia atrás sin percatarse de que el taxi del Sr. Sotero estaba tras él). Ello se acredita de la declaración firme, persistente y creíble (apreciada desde la inmediación) del conductor ya mencionado (el Sr. Sotero). Consta el daño en la documental del folio

16 y 17 y en la pericial del folio 33 (y también fue referida por los Policías Locales que intervinieron en el atestado –ver folio 13 y ratificación en el acto del juicio-). En cuanto a la realización de la prueba de alcoholemia fue impecable. Se ajusta plenamente a la norma vigente (y saliendo al paso de los argumentos de la defensa –absolutamente respetables-, el mundo de lo deseable, de momento, no es fuente del ordenamiento jurídico español ni los Jueces y Tribunales están autorizados a aplicar el supuesto <deber ser> sobre lo <que es>, o sea la norma jurídica vigente).

La idoneidad del etilómetro está documentada al folio 15 y los resultados obran al folio 6 y al 7.

Los Policías ratificaron lo que consta en el atestado policial y ambos –singularmente el primero- coincidió con lo que ya apreció el taxista Sr. Sotero. El acusado actuaba con lentitud, como condicionado por algo (el alcohol) de tal modo que su respuesta en el actuar (descontando el normal momento del nerviosismo por la situación) indicaba que algo lastraba la actuación de Juan Diego (claramente el exceso de alcohol).

La prueba objetiva (la del etilómetro) arrojó las tasas que ya se han indicado (superiores al umbral que diferencia la responsabilidad administrativa de la penal). Además los síntomas externos (observados por los agentes policiales –ver folio 5-) evidenciaban lo que el dato objetivo ya había constatado, esto es, que el acusado conducía bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

Es verdad que en el atestado se utilizaban frases o expresiones que pueden tener un significado variado o discutible desde el punto de vista de la precisión conceptual y semántica, pero en el contexto en que se utilizan (atestado policial con destino a la Fiscalía y los Tribunales), responden a lo que se quiere expresar y ello sin perder de vista que quien confecciona el atestado, lo hace (generalmente) en condiciones poco propicias para el uso del lenguaje pulcro, preciso y de cierta calidad literaria.

Así a título de ejemplo (ver folio 5) cuando se dice que <el habla es espesa>, teniendo en cuenta que según el Diccionario de la RAE el adjetivo espeso/a lo define como <dicho de una masa o de una sustancia fluida o gaseosa: que tiene mucha densidad o condensación> o que <dicho de dos o más cosas: que están muy juntas y apretadas, como suele suceder en los trigos, en las arboledas o en los montes> o

que lo equipara a <grueso, corpulento o macizo> o <sucio, desaseado y grasiento>, es claro que esa expresión podía haberse sustituido, por ejemplo por la de: <..el conductor habla con dificultad, las frases no son fluidas, se entrecorta al expresarse, no acaba de pronunciar las letras o palabras de forma completa..> pero, aun reconociendo que la expresión que se está analizando (a mero título de ejemplo) podía ser otra, es capaz de transmitir la idea (eso es lo relevante) de que el afectado no habla de forma natural y fluida sino de forma “espesa” como si algo limitase o hiciese más lento o dificultase el movimiento de la lengua, los labios de tal modo que la palabra que finalmente salía al exterior se presentaba como inadecuada para la natural comprensión (lo que por otra parte es uno de los primeros síntomas de la embriaguez).

En definitiva el acusado merece el reproche penal en cuanto que ha cometido el delito del art. 379.2 CP.

Como coda dos ideas. El sistema penal español se basa en la previa definición de conductas que se tipifican como sancionables y que si el sujeto activo la realiza (de forma consciente y deliberada –en el caso de los delitos dolosos-) y no hay una causa que justifique que el sujeto no deba responder de su acción, siempre llevará como consecuencia una pena que, por definición, es algo poco grato para el afectado por la misma y que puede lesionar su patrimonio (caso de la pena de multa) o su libertad (prisión) o alguna de sus actividades (conducir, tener y portar armas, ejercer su profesión, etc) pero –eso conviene no perderlo de vista-, esa consecuencia no puede ser achacada a la maldad de la norma o la estulticia del legislador, sino a la conducta del infractor que, quizá debió reflexionar (a priori) sobre las perjudiciales consecuencias de su actuar por el eventual efecto (perjudicial) de la pena sobre él (debió atender a la denominada <contra-spinta> mencionada por algunos penalistas italianos).

CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO.- En lo relativo a la pena a imponer, teniendo en cuenta la tasa de alcohol que arrojaba el acusado y que –aunque de escasa entidad- llegó a tener un

accidente con el vehículo taxi (que no se percató estaba tras él), se estima ponderada la de 7 meses de multa si bien con cuota diaria de 4 € a la vista del nivel económico del acusado y la de 1 año y 2 meses de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores.

SEXTO.- Las costas deben imponerse al acusado (artículos. 123 del Código Penal, 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación al caso

FALLO

Condeno a **JUAN DIEGO** como autor criminalmente responsable, de un **delito contra la seguridad vial** de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a quien se impone la pena de SIETE MESES (**7 meses**) de multa con cuota diaria de CUATRO EUROS (**4 €**), con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 CP para el caso de impago, así como la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante UN AÑO Y DOS MESES (**1 años y 2 meses**).

Ello con imposición de costas.

Comuníquese esta resolución -una vez que sea firme- a la Dirección Provincial de Tráfico.

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio en autos

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes intervinientes, y a los ofendidos y perjudicados por los delitos aún cuando no se hubieran mostrado parte en la causa, haciéndoles saber que la misma no es firme y



que podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de **DIEZ** días para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/